



**SENTENCIA**

<b>PROCESO</b>	Ordinario laboral
<b>DEMANDANTE</b>	Consorcio Remanentes Telecom
<b>DEMANDADO</b>	Luís Alberto Mena Ruiz
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05- <b>014-2017-00611</b>
<b>TEMA</b>	Reintegro de dineros de la pensión anticipada e indexación
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **096** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A.** como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN –PAR-**, en contra del señor **LUÍS ALBERTO MENA RUIZ**, con radicado **05-001-31-05-014-2017-00611**.

• **PRETENSIONES:**

La sociedad demandante pretende se declare que el señor **LUÍS ALBERTO MENA RUIZ** adeuda al **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN –PAR-**, la suma de \$34'597.553, por concepto de dineros recibidos con ocasión de fallos de tutela proferido en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero y confirmado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lórica, los cuales fueron **REVOCADOS** por sentencia de la Corte Constitucional SU-377 del 12 de junio del 2014, por concepto de mesadas de pensión anticipada a la que no tenía derecho. Y como consecuencia, se ordene al demandado, al reintegro de dichos dineros junto con la indexación y las costas procesales.

- **HECHOS:**

Como fundamento de las pretensiones, señaló que el accionado laboró al servicio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM- el 19 de enero de 1980 al 31 de enero de 2006. Que en el año 2003, se ofreció un plan pensión anticipada dirigido a los trabajadores oficiales que les faltare 7 años o menos para cumplir los requisitos de pensión, al 31 de marzo de 2003, en donde se establecieron ciertos requisitos y modalidades de pensión. Que el demandado no se encontraba cobijado por ninguno de los regímenes especiales de pensión ofrecidos. Que el accionado instauró acción de tutela, prosperando la misma y siendo confirmada por el superior, en la que se ordenó reconocer las mesadas dejadas de percibir desde la desvinculación y la indexación. Que la tutela fue cumplida por la entidad, reconociendo al señor MENA RUIZ la suma de \$34'597.553. Y que a través de la sentencia T-377 de 2014, se revocó el reconocimiento de la pensión, sin que a la fecha haya sido reintegrado dinero alguno el accionado.

- **CONTESTACIÓN:**

El actor a través de su apoderado dio contestación extemporánea a la demanda, por lo que se dio por no contestada la misma.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 17 de enero de 2020, el Juzgado Decimocuarto Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** al señor LUÍS ALBERTO MENA RUIZ, a restituir al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACIÓN Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN, cuyo administrador y vocero es el CONSORCIO REMANENTES TELECOM, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., la suma de \$34'597.553. Como argumento de su decisión expuso, que no existió una causa que justifique la recepción de dichos dineros, pues si bien habían sido otorgados en virtud de fallos de tutelas, los mismos fueron revocados por la sentencia proferida por la Corte Constitucional SU-377 del 12 de junio del 2014, por lo que configura la causal de enriquecimiento sin causa, debido al empobrecimiento por parte de la demandante sin una causa jurídica que soporte tal hecho.

Y, **CONDENÓ** en costas a la parte accionada.

- **APELACIÓN:**

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada manifestando, en síntesis, que se debe revocar la sentencia para que en su lugar sea absuelto, toda vez que las pruebas documentales y el interrogatorio de parte dan cuenta que recibió dichas sumas de dinero bajo una orden judicial y de buena fe. Y que no se cumplen todos los requisitos de la teoría del enriquecimiento sin causa.

- **ALEGATOS:**

- ✓ **CONSORCIO REMANENTES DE TELECOM:**

Una vez transcurrido el término de traslado, la parte actora en sus alegatos expuso que si se presentó un enriquecimiento sin causa e indebido por parte del demandado. Que es necesario señalar que el pago de lo no debido constituye una figura de la que se desprende la acción de repetición tendiente a obtener la devolución de lo indebidamente pagado, en los términos de los artículos 2318 y 2319 del Código Civil. Que en el expediente se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales que se han fijado para que prospere la acción de repetición por el pago no debido. Que el artículo 7 del Decreto 306 de 1992, establece que cuando se revoque un fallo de tutela por el Juez que conoce la impugnación o en virtud de la revisión que del mismo haga la Corte Constitucional, quedará sin efecto la providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. Por lo que se debe confirmar la sentencia de primera instancia y condenar en costas al demandado.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado*

de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

### CONSIDERACIONES

No se debate, que a través de sentencia de tutela, visibles de folios 38 a 46 del expediente, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antero, Córdoba, se le ordenó al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM, reconocer al demandado el derecho de pensión anticipada, cancelándole un retroactivo pensional por valor de \$34'597.553, como lo certifica el documento de folio 21 del expediente.

La anterior sentencia de tutela, fue confirmada el 28 de octubre del 2009 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba (folios 47 a 59).

Tampoco se debate, que las anteriores decisiones, fueron revocadas en su totalidad por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 377 del 12 de junio del 2014. (Folio 60 a 130).

El **problema jurídico**, se centrará en determinar si la entidad demandante tiene derecho al reintegro de dineros entregados al demandado, por cumplirse los requisitos del enriquecimiento sin causa.

Debe precisarse que, al existir una sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual se revocó unas sentencias de tutela anteriormente emitidas, a todas luces esta deja sin efectos lo decidido frente al tema, lo cual genera necesariamente para el señor LUÍS ALBERTO MENA RUIZ acudir, a la vía ordinaria en búsqueda de definir la titularidad de la pensión.

Pues bien, en el caso de autos, se presenta una clara recepción de dineros que en su oportunidad fueron dados al demandado por orden judicial, pero seguidamente la causa de este evento fue revocada por la Corte Constitucional, debiéndose tener en cuenta lo que la jurisprudencia y la doctrina ha establecido sobre la existencia del enriquecimiento sin causa, de la siguiente manera: *(i) que se produzca un enriquecimiento en uno de los*

*patrimonios y un empobrecimiento correlativo en el otro; (ii) que la ventaja patrimonial obtenida por el enriquecido carezca de causa; (iii) que la persona que ejercite la acción de in rem verso carezca de otro medio o acción con base en una de las fuentes de las obligaciones y (iv) que no se pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley.*

En el caso que nos convoca, lo anterior, se materializa en todos y cada uno de los elementos, toda vez que con el pago del retroactivo pensional existió un enriquecimiento o aumento de un patrimonio, a su vez hubo correlativamente un empobrecimiento o detrimento de otro, y dicho enriquecimiento se produjo sin causa, es decir, sin fundamento jurídico o legal.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha abordado el enriquecimiento sin causa como un principio general del derecho aplicable en esta especialidad en virtud de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 230 de la Constitución Política. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de noviembre de 1998, con radicado 11.046 indicó:

*“De manera que el principio de enriquecimiento injusto, enmarcado dentro de los principios de derecho común, no puede ser ajeno a la jurisdicción laboral y, menos cuando el propio Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 19 admite la posibilidad de aplicarlo, dentro de un espíritu de equidad. Sin embargo, como el fin perseguido al demandar con sustento en este principio, es el de impedir que en justicia no se incremente el patrimonio de una persona con perjuicio económico de otra, es pertinente que se cumplan las mismas condiciones que para su aplicación se han elaborado de antaño por la Jurisprudencia, las cuales, además, coinciden con las contempladas por la doctrina, obviamente, sin dejar de lado, como exigencia fundamental que haya habido una prestación de servicio. En ese orden, ellas corresponden a que se presente un enriquecimiento injusto del demandado, un empobrecimiento correlativo del demandante y que el actor no tenga otra acción o medio a su alcance para obtener lo que considera le ha sido arrebatado, condiciones que propiamente facultan al afectado para iniciar la acción de in rem verso”.*

Más recientemente, en sentencia SL 3814 del 16 de septiembre de 2020, radicado 66071, consideró que:

*“... el enriquecimiento sin causa, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia (sobre todo la de la especialidad en lo civil), constituye una pretensión en sí misma considerada cuyo encausamiento se hace en ejercicio de la acción*

*«in rem verso» por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente.*

*La jurisprudencia gestora de la institución del enriquecimiento sin causa (como otra fuente más de obligaciones) se orientó a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua, mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida, sin que existiera una razón que explicara esa alteración, caso en el cual se impuso al juez el deber de adoptar los correctivos necesarios en procura de que se restableciera la equidad.”*

Conforme lo expuesto, se evidencia que con la decisión proferida por la Corte Constitucional en sentencia SU-377 de 2014, devino en inexistente la obligación pagada por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES – PAR TELECOM a favor del demandado, en la suma de \$34'597.553, configurándose así un pago de lo no debido, ya que lógicamente esa suma de dinero acrecentó el patrimonio del trabajador demandado y, correlativamente, disminuyó el patrimonio de la entidad demandante que en su momento cumplió con la orden judicial sin asidero jurídico o justo título, además, que dada la naturaleza del asunto por la revocatoria del fallo de tutela aludido, la aquí demandante no cuenta con otra acción para lograr el reembolso o devolución del dinero que se niega a restituir el demandado.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente a uno de esos casos de ex trabajadores de TELECOM, cuya pensión anticipada reconocida por sentencia de tutela fue revocada por la Corte Constitucional en la plurimencionada SU-377 de 2014, lo que ocurrió en la sentencia SL3458 del 16 de septiembre de 2020, radicación 81404, en la que de manera expresa señaló:

*“... si bien, inicialmente las pretensiones del tutelante salieron adelante, también es cierto que, como lo relató el juzgador plural la Corte Constitucional como autoridad de cierre, en sede de revisión profirió fallo de unificación – sentencia CC SU-377-2014-, que dispuso revocar el amparo inicialmente concedido, por ende, como lo explicó esta misma Sala en situación similar a la analizada, «ante la desaparición de la base jurídica del pago, es decir del fallo de amparo, surge para el beneficiario la obligación de reembolsar los valores recibidos»(CSJ SL1432-2020).*

*Aunque la disertación que propone el censor es más jurídica que fáctica, para abundar en razones debe mencionarse que no puede fincar un supuesto justo título para no devolver el dinero recibido, en dos sentencias que no tenían carácter definitivo toda vez que, de conformidad con el procedimiento de la acción subsidiaria y residual a la que acudió, existía la*

*posibilidad de su revisión por la Corte Constitucional y, que como ocurrió, fueron seleccionadas y revocadas por esa Corporación en su función de órgano de cierre.*

*Se dice lo anterior, por cuanto **las decisiones proferidas dentro del proceso de amparo constitucional, tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada solo cuando la Corte Constitucional «adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria»** (CC T-185-2013), por ende, aunque inicialmente pudo haber triunfado en sus pretensiones, la revocatoria de las providencias que condujeron al pago de los \$291.966.273, dejó sin ningún fundamento jurídico tanto el ingreso como la permanencia de ese dinero en su patrimonio". (Negrilla fuera del texto).*

Así las cosas, concluye esta Sala que efectivamente no existe causa o título que justifique el pago de la suma de dinero objeto de litigio al trabajador demandado, por lo que está obligado a su reembolso a la persona jurídica hoy a cargo de las contingencias del extinto TELECOM, conforme lo establece el artículo 2318 del Código Civil, el cual expresa que *"El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad"*, mismo que es aplicable al procedimiento laboral por vía de interpretación analógica que dispone el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

No sobra advertir que la misma Corte Constitucional en el Auto 503 de 2015, precisó que las sumas de dinero reconocidas en cumplimiento de los fallos de tutela, pueden restituirse a favor del PAR de TELECOM con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, "en tanto la fuente de la obligación desapareció", careciendo de justificación constitucional y legal los pagos realizados a los ex trabajadores.

Así las cosas, se deberá **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia en tal sentido, al igual que la condena impuesta por indexación, debido a la devaluación de la moneda colombiana.

Costas de la primera instancia como lo dijo el juez. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República

de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia que se revisa en apelación de fecha y procedencia conocida.

Costas como se dejó dicho.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 073 del 30 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>